



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-024-2021-00273-01
Demandante:	Luz Adriana Marcela Sánchez Roa
Demandado:	Colpensiones y Protección S.A. y
Asunto:	Consulta sentencia
Procedencia:	Juzgado Veinticuatro Laboral Circuito de Medellín
Magistrada:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, marzo veintinueve (29) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, en ausencia justificada y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el grado jurisdiccional de consulta, en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el 7 de febrero de 2023, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora LUZ ADRIANA MARCELA SANCHEZ ROA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Radicado 05001-31-05-024-2021-00273-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora LUZ ADRIANA MARCELA SANCHEZ ROA, convocó a juicio a COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, realizada a través de Protección S.A., disponiéndose el regreso automático a Colpensiones y en consecuencia, se ordene a Protección S.A., trasladar a Colpensiones todos los valores que se encuentren en la cuenta de ahorro individual, tales como cotizaciones y rendimientos, incluida la comisión de administración, reaseguros y demás sumas que se dispongan, ordenando a Colpensiones reciba dichos aportes y autorice el retorno al Régimen de Prima Media.

Como fundamento de tales suplicas, se narró que la señora LUZ ADRIANA MARCELA SANCHEZ ROA, estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales desde febrero de 1991 hasta agosto de 1998, que en el mes de agosto de 2001, se trasladó de régimen pensional, afiliándose a Santander hoy Protección S.A., convencida que era la mejor opción, pues así se lo indicó el asesor que la visitó en el lugar de trabajo, quien le señaló que en dicho fondo se pensionaría a la edad que quisiera y con un mayor valor pensional, además de que el ISS iba a desaparecer y que los únicos que iban a manejar las pensiones eran los fondos privados, sin informar las diferencias entre los regímenes, ni la forma de pensionarse en uno y otro, así como tampoco las modalidades de pensión del régimen privado.

1.2.- CONTESTACIÓN

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado, **COLPENSIONES**, dio respuesta a la demanda, señalando que no le constan los hechos de la misma, por cuanto la entidad no tuvo intervención, debiendo la parte actora en todo caso, probar lo afirmado. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia del traslado de régimen; inexistencia de ineficacia del traslado a la AFP Protección S.A.; inoponibilidad de la responsabilidad de las AFP privadas ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen; desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el Régimen de Prima Media; desconocimiento del precedente judicial; equivalencia del ahorro o diferencias pensionales; devolución de aportes debidamente indexados; devolución de cuotas de administración debidamente indexadas por parte de las AFP Privadas; buena fe; prescripción; compensación; imposibilidad de condena en costas y la innominada.

Por su parte, **PROTECCIÓN S.A.**, admitió como cierta la vinculación de la actora al extinto ISS y el traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no siendo cierto que la información suministrada por el asesor comercial hubiera sido la afirmada en la demanda, aclarando que la demandante fue plenamente informada sobre las características del Régimen de Ahorro Individual, las distintas modalidades de pensión y las diferencias respecto del Régimen de Prima Media, ofreciéndose una asesoría objetiva, completa, clara, veraz e integral.

En oposición a la prosperidad de las pretensiones, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la

nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe; innominada o genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 7 de febrero de 2023, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por la señora Luz Adriana Marcela Sánchez Roa, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual en el año 2001 a Protección S.A.; condenó a Protección S.A., a que en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, traslade a Colpensiones todos los saldos de la cuenta de ahorro individual, con los rendimientos financieros, bonos pensionales, el porcentaje cobrado por comisiones, gastos de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, descontados durante la permanencia en dicho fondo, con cargo a sus propios recursos, debidamente indexados, disponiendo que al momento de cumplir la orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen y deberá normalizar la afiliación en el sistema de información de administradoras de fondos de pensiones; ordenó a Colpensiones a reactivar de manera inmediata la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media y recibir la devolución de los dineros ordenados, imponiendo condena en costas a Protección S.A.

1.4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada Colpensiones, señalando que en el proceso se probó que la demandante realizó su afiliación al fondo privado, a través de un acto libre y

voluntario, sin que existieran vicios en el consentimiento, por lo que deberá revocarse la sentencia de primera instancia, siendo claro que el traslado de un afiliado faltando menos de 10 años para el cumplimiento de la edad pensional descapitaliza el régimen, sin que pueda extenderse las consecuencias de la ineficacia a terceros, como lo es Colpensiones.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora LUZ ADRIANA MARCELA SANCHEZ ROA nació el 20 de septiembre de 1965, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 11 del anexo 02 del expediente digital.
- Que la actora se trasladó del Régimen de Prima al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Santander hoy Protección S.A., el 21 de marzo de 2001, con fecha de efectividad del 01 de junio de la misma

anualidad, de conformidad con el formulario de afiliación obrante a folio 46 del anexo 06 del expediente digital.

- Que la accionante acredita un total de 1057 semanas cotizadas, de acuerdo con la historia laboral generada por Protección S.A., el 21 de enero de 2022, que milita a folios 64 a 76 del anexo 06 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de consulta, proferida en el presente proceso por la señora Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si es ineficaz el traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, efectuado el día 21 de marzo de 2001 a través de la AFP Santander actualmente, Protección S.A.?

¿Si como consecuencia de la ineficacia, debe ordenarse a Protección S.A., el traslado de las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y los descuentos por seguros previsionales, debidamente indexados?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, i) es ineficaz el acto de afiliación por incumplimiento del deber de información por parte de Protección S.A ii) por lo tanto, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante a Colpensiones, incluyendo las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y los descuentos por seguros previsionales, estos

tres últimos debidamente indexados, en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994

y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021, SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022, SL1637 del 11 de mayo de 2022 y más recientemente en las sentencias, SL113

del 31 de enero de 2023, SL178 del 07 de febrero de 2023, SL397 del 01 de marzo de 2023, entre muchas otras.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso sometido a consideración de la Sala, se establece que la señora Luz Adriana Marcela Sánchez Roa, se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Santander, hoy Protección S.A., el 21 de marzo de 2001, de conformidad con el formulario de afiliación obrante a folio 46 del anexo 06 del expediente digital, no obstante, se recuerda que el formulario de afiliación no da cuenta de la información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se supe con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); por ello no puede inferirse la voluntariedad del traslado en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Al absolver interrogatorio de parte, manifestó la demandante que estaba trabajando en un programa de bienestar social del distrito del cartucho, que estaba en la sede de Teusaquillo y llegaron los asesores de fondos privados, quienes les dijeron que el Seguro se iba a terminar, que todas las pensiones iban a quedar en el fondo privado y que era una necesidad salvaguardar los aportes que se habían hecho hasta el momento, afirmando que fue algo muy corto, que solo le hablaron de aportes y que tendría una cuenta individual, sin que se le hubieran exhibido otras características del sistema y que no recibió reasesoría pensional, ni conoció que existía un límite de edad para efectuar traslado, evidenciando que de los dichos de la pretensora, no es posible obtener prueba de confesión y contrario a ello, se presenta una ratificación de los hechos narrados en la demanda.

Se sigue de lo anterior, que la afiliación de la actora al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con la cual tuvo lugar el cambio de régimen pensional, se efectuó sin que la misma hubiera recibido información completa y adecuada, esto es, sin conocer las características, funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, consecuencias del traslado, ni las desventajas que podría traerle dicho régimen pensional, conforme a las exigencias legales vigentes para la fecha del traslado.

Aunado a lo anterior, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, que desvirtúe lo afirmado por la accionante, a partir del cual pueda establecerse que en su momento la AFP Santander hoy Protección S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones del traslado.

En línea con lo anterior, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó la AFP Santander S.A., a la demandante, al

momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, por lo que no son de recibos los argumentos expuesto por la apoderada de Colpensiones en los alegatos de conclusión, referentes a la validez de la afiliación de la demandante al régimen privado.

Sobre los efectos de la ineficacia

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que fue la AFP Santander hoy Protección S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información, y siendo la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común

también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de las AFP demandadas y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL2877 del 29 de julio de 2020 y SL 3034 de 2021, última en la cual sobre el punto se indicó:

“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando

el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.

Sobre la indexación

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución, como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, es un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones.

Colofón de lo anterior, la orden de traslado impuesta por la a quo, se encuentra ajustada a los anteriores criterios, imponiéndose la confirmación íntegra del fallo.

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral de Circuito de Medellín, el 7 de febrero del año en curso, en el proceso ordinario instaurado por la señora LUZ ADRIANA MARCELA SANCHEZ ROA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.

2.- Sin costas en esta instancia.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

(Sin firma por ausencia justificada)